



CRISIS Y AGOTAMIENTO DEL MODELO NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA. ALTERNATIVAS CIVILIZATORIAS

Jaime A. Preciado Coronado¹

Por primera vez en la historia del capitalismo se conjugan tres crisis simultáneas:

- 1) la financiera-bancaria-bursátil, que implica la pervivencia del capital especulativo por encima del productivo; se socializan pérdidas y se privatizan beneficios mediante el regreso de enfoques estadocéntricos que favorecen poderes fácticos;
- 2) la ecológico-alimentaria, entrañada en el calentamiento global, en su dimensión hidropolítica planetaria, y en la manipulación biogenética y transgénica para producir mercancías agroindustriales y no alimentos;
- 3) la del modelo energético depredador, cuya geopolítica trastoca el mercado mundial de los recursos no renovables (petróleo y gas, principalmente), sin que las energías alternativas tengan viabilidad para sustituirlo.

Esta triple crisis evidencia la inviabilidad civilizatoria del capitalismo y lo sitúa al borde de la catástrofe; un riesgo que no asegura transformar la crisis en oportunidad. Hay, sin embargo, un horizonte de esperanzas fundado sobre la emergencia de alternativas creadas mediante micro-experiencias detonadas por movimientos sociales, que se registran desde escalas locales, nacionales y mundiales. Desde ese enfoque alternativo se construye un pensamiento complejo que es capaz de integrar un proyecto cívico-ético-político, de futuro incluyente, sustentable, con derecho al buen vivir para todos/as.

Propongo tratar esta compleja convergencia de la triple crisis en una perspectiva que se plantea abordar cuatro ejes de análisis:

- **Depredación y deterioro ambiental**, eje en el que se destaca la convergencia interdisciplinaria de las ciencias sociales, para comprender el contexto de la ecología política latinoamericana, donde la acción colectiva va construyendo formatos de apropiación social autosustentables, asociados con la transformación y preservación de la rica biodiversidad de nuestra región.

¹ Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara, y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México. CE: japreco@hotmail.com



- **Nuevos escenarios productivos** creados por la crisis capitalista, donde el inminente fracaso del neoliberalismo, en sus distintas vertientes del Consenso de Washington, enfrenta escenarios que tienden a la reproducción del capitalismo por otros medios, o bien escenarios anticapitalistas o al menos antineoliberales, que tratan de combatir la flexibilización laboral, la desregulación del trabajo y que imprimen nuevos derroteros, con ingredientes comunitarios, a los procesos de integración regional.
- **Aportes de la democracia participativa a la ciudadanía y al Estado social del buen vivir**, eje en torno del cual Latinoamérica registra importantes experiencias de innovación socio-organizativa en la creación de nuevas relaciones entre sociedad y gobierno, las cuales se expresan en la presencia, en algunos casos el predominio, de una agenda de izquierda –por la equidad, justicia redistributiva, participación ciudadana- en la mayoría de gobiernos nacionales y en buena parte de gobiernos locales de América Latina. Aunque heterogéneas, esas experiencias enfrentan la crisis mediante procesos sociales que fundan nuevas instituciones de legalidad constitucional, en un marco de disputas por ganar la legitimidad del nuevo Estado.
- **La construcción del pensamiento social crítico y alternativo**, se refiere a otra fortaleza de nuestra región, desde la que se plantean horizontes con sentido de futuro liberador, incluyente, participativo para nuestras sociedades. Un pensamiento surgido desde la crítica de la (neo)colonialidad, que se pregunta sobre su pertinencia y que aporta, o acompaña, la creación de alternativas al capitalismo en sus más diferentes ámbitos, como el respeto e impulso de la interculturalidad y la diversidad de pueblos originarios, y en diferentes escalas socioespaciales, que van de la sociología del cuerpo y las relaciones de género, a propuestas supranacionales y globales para superar la triple crisis que nos afecta.

PRIMER EJE: DETERIORO AMBIENTAL BIODIVERSIDADDEPREDACIÓN CAPITALISTA

La depredación ambiental que trae consigo el capitalismo, se ha convertido en uno de los factores más dinámicos de la fragmentación social debida al deterioro de las condiciones de vida. La creciente oposición entre crecimiento y desarrollo que está implicada en el



capitalismo no tiene visos de solución inmediata. Sus efectos globales amenazan la vida misma en el planeta y deterioran, aunque de manera diferenciada, la calidad de vida social e individual. Ni las instituciones internacionales, ni la inmensa mayoría de Estados nacionales han sido capaces de ofrecer soluciones puntuales a los conflictos ambientales, y la solución global se posterga peligrosamente amenazando al futuro mismo de la humanidad. La esperanza reside, no obstante, en la creación de acciones colectivas que estructuran nuevas demandas de convivencia y de coexistencia con la naturaleza, desde el marco de un desarrollo autosustentable.

Varios autores (Alba, 2007; Ávila 2004) reconocen que ha cambiado la relación entre ambiente y sociedad con el papel de los nuevos movimientos sociales, pues diversos conflictos ambientales emergen como movimientos identitarios y de búsqueda de reconocimiento simbólico, ya que éstos se constituyen en el lugar de las luchas sociales con reivindicaciones cada vez más políticas, antes concentradas en demandas económicas vinculadas con el sindicalismo, o con el colectivismo, en cuya transformación ahora luchan por bienes colectivos (asociaciones de barrios, grupos de base territorial) o por nuevas modalidades de acción colectiva, debido a la insuficiencia y el deterioro de la calidad de los servicios públicos.

Geopolítica del Agua – Hidropolítica

Si bien la geopolítica, en su sentido clásico, se refiere al papel de los recursos naturales como objetivo de acción militar cuando estos juegan un factor definitorio del poder de una nación (Ávila García, 2004), elaboraciones teóricas novedosas desde el pensamiento crítico, restituyen otros valores y campos interpretativos a la geopolítica crítica. En ese sentido, el pensamiento social contemporáneo encuentra convergencias plausibles entre geopolítica e hidropolítica para la mejor comprensión de los conflictos por el agua. Coincido con Ávila (2004) en cuanto a que en los temas de seguridad internacional, el centro de atención ha sido el valor de los recursos no renovables como el petróleo, pero que el agua también puede serlo en la medida en que es una fuente de poder económico o político.

El carácter estratégico del agua toca las tensiones entre escasez y disponibilidad; la rivalidad entre países, regiones, grupos sociales y empresas por su control y el acceso a las



fuentes alternativas de abastecimiento del vital líquido. Aunque Ávila aclara que no debe confundirse la hidropolítica con la política del agua, ya que ésta última se refiere al quehacer del Estado en materia de agua (desde legislaciones hasta proyectos de desarrollo).

De acuerdo con Alba (2007) el término hidropolítica permite definir coyunturas vinculantes entre cambio político y conflictos por el agua, dado el carácter geoestratégico de esos conflictos que incluyen factores de rivalidad no desdeñables, en función de la escasez del líquido, del poder ejercido por actores locales y sobre todo extra locales.

Es destacable la transnacionalización del manejo y control del agua, pues ello implica estrategias de apropiación del recurso disponible y la apertura de fuentes alternativas de abastecimiento. Alrededor de lo cual se constituyen complejos circuitos de producción del agua, desde las transnacionales que la embotellan hasta las empresas beneficiadas por la privatización del servicio urbano de agua potable, pasando por constructoras y subcontratistas asociados con la creación de infraestructura para explotar los recursos hídricos.

La hidropolítica latinoamericana muestra fehacientemente la depredación ambiental y el deterioro de la calidad de vida que trae consigo el capitalismo. López y Ochoa (s/f) plantean los conflictos sociales por el agua más visibles en América Latina: privatización de servicios públicos del agua; alza de tarifas; contaminación de ríos, lagos y acuíferos; problemas de escasez en algunas regiones; alteración de flujos hidrológicos que repercuten de manera negativa sobre usuarios del agua o comunidades que además sufren inundaciones recurrentes; competencia y demanda por el recurso ante nuevos usos agrícolas, urbanos, industriales, turísticos, o ambientales; especulación y acaparamiento empresarial mediante concesiones; construcción impuesta de infraestructuras poco sustentables, principalmente de represas; situaciones de despojo a comunidades y afectaciones a la salud humana, provocada por una deficiente calidad del agua.

López y Ochoa (s/f) plantean que “los conflictos por el agua en América Latina y el Caribe no se caracterizan principalmente por situaciones de escasez, sino por problemas de distribución y de calidad. En el subcontinente se concentran aproximadamente 75% de los recursos hídricos renovables del continente americano, lo que a su vez representa 33% de los recursos hídricos del mundo.” Aunque Latinoamérica es la región con la más alta



disponibilidad de agua a nivel mundial, Suramérica reúne la mayor cantidad en el subcontinente (17 mil 130 kilómetros cúbicos de agua renovable al año, frente a 7 mil 222 que se distribuyen en el resto de América). Estos autores señalan contrastes, pues mientras que Suramérica alberga solo el 6% de la población mundial, posee el 26% de los recursos hídricos del mundo y regiones como Asia que posee el 60% de la población mundial, sólo dispone del 36% del agua renovable. La misma desproporción se da entre las regiones subnacionales de varios países latinoamericanos, donde hay oposiciones asimétricas entre población concentrada en territorios que dispone de escasos recursos hídricos.

Así como están opuestamente distribuidos población y agua, la competencia entre la agricultura, la industria y las ciudades por los limitados suministros de agua ya está restringiendo las actividades de desarrollo en muchos países. A medida que las poblaciones se expandan y las economías crezcan, la competencia por este escaso recurso se intensificará, y con ella, también los conflictos entre los usuarios del agua. López y Ochoa (s/f), señalan que: “En América Latina, los mayores volúmenes de agua se destinan principalmente a la agricultura (70%), seguidos por los que se emplean en la industria (20%) y en tercer lugar los dedicados al uso doméstico (10%); si bien los porcentajes nacionales presentan variaciones”².

América Latina es objeto de la atención de las transnacionales del agua. López Ramírez (2008) resalta el gigantesco potencial hídrico en Suramérica, con el caso de la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná, la Triple Frontera, donde se encuentra el dique de agua con potencial hidroeléctrico más grande del mundo. Sin embargo, la fragmentación política de nuestros países hace que de las treinta y ocho cuencas internacionales que se encuentran en Sudamérica, sólo cuatro tengan tratados internacionales firmados por las naciones ribereñas : La Plata, Titicaca, Amazonas y el complejo lacustre boliviano-brasileño —el más grande

² Los autores ilustran estas diferencias: “En países como Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay y las Guyanas en Suramérica, República Dominicana, Cuba en el Caribe y Honduras, y Guatemala en América Central, el uso agrícola determina más de 70% de las extracciones. En Brasil y Guatemala la agricultura es muy importante [entre 63 y 85%], pero el uso del sector industrial —que utiliza 22 y 14% respectivamente— le sigue en importancia. Países en los que la agricultura es dominante con un peso significativo del sector doméstico (15-30%) son México, Argentina, Paraguay y Nicaragua. En Colombia y Venezuela, es igualmente importante el uso agrícola y el doméstico, representando este último entre 42 y 38% de las extracciones... [en] Belice el uso industrial es ampliamente dominante, utilizando la industria más de 68% del agua... [el] uso industrial es muy significativo en Trinidad y Tabago (33%), Chile y Brasil (más de 22%). Países en los que el consumo doméstico predomina son Dominica (100%), Barbados (76%), Trinidad y Tabago (68%) y Panamá (64%)...”



del mundo- que converge en la laguna Mirim. A lo que se añade el gigantesco acuífero de Guaraní, la segunda reserva subterránea de agua dulce en el mundo, que junto con la cuenca amazónica sobrepasa el 65% del agua dulce aprovechable en el continente americano.

Nuestra región, vive dramáticamente el impacto de la desigualdad causado sobre la mayoría de la población por la depredación ambiental capitalista. De acuerdo con López Ramírez (2008) “En la región de América Latina y el Caribe (ALC), se calcula que de los 510 millones de habitantes de la región, unos 56 millones no tienen acceso a agua limpia; mientras que otros 132 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. López y Ochoa (s/f) señalan que en nuestra región “se reportan 153 mil muertes al año causadas por enfermedades diarreicas relacionadas con el agua, de las cuales 85% ocurren en niños menos de 5 años. Asimismo, se han detectado otras enfermedades degenerativas como el cáncer, la leucemia, el asma y la insuficiencia renal crónica, debido a la exposición de las poblaciones a aguas altamente contaminadas.

Biopiratería, manipulación transgénica y revalorización de la minería

Otra manifestación perversa de la depredación ambiental capitalista, lo representa la explotación irresponsable de la biodiversidad latinoamericana, tanto por la vía de la transnacionalización “legal” que encierran los acuerdos comerciales negociados por los poderes dominantes en nuestros países, como mediante la llamada biopiratería, que se aprovecha de la rica biodiversidad de Nuestra América evadiendo el derecho ambiental internacional y las legislaciones nacionales.

En el primer caso, la manipulación transgénica está sujeta a las estrategias de las transnacionales y a la explotación de las patentes que hacen fundamentalmente las productoras de semillas y las químico-farmacéuticas, quienes reducen el margen de legalidad a límites cada vez más estrechos. Simultáneamente, la biopiratería, alude a la apropiación ilegal de conocimientos y/o prácticas relacionadas con la diversidad genética y biológica de la naturaleza. Las grandes fuentes de estos conocimientos son la diversidad animal y vegetal, además de los ancestrales conocimientos de los pueblos originarios, relacionados con la cura o tratamiento de enfermedades. Aprovechándose del conocimiento



bioétnico de sociedades que son expoliadas sin hacerlas partícipes del beneficio asociado a su cultura.

Latinoamérica, afortunadamente, es uno de los escenarios de acción colectiva en el que se debate tanto el derecho a un ambiente libre de organismos genéticamente modificados (OGM's), como el control estatal y social de la biopiratería³. Nuestra región posee 4 de los 11 países megadiversos y esa fortaleza está siendo cuidada por un vigoroso movimiento social, particularmente de base étnica. Pero la diversidad biológica enfrenta un proceso de rápida destrucción, debido, entre otras cosas, a megaproyectos financiados internacionalmente como la construcción de represas, diques y autopistas, la explotación de minas o la creación de establecimientos de piscicultura.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) ésta región "se está convirtiendo en uno de los principales productores de oro del mundo, particularmente Perú, así como Chile, Brasil y México [...] Argentina emerge como productor importante y hay gran potencial de reservas en Colombia y Venezuela"⁴.

El oro, que sigue siendo la única moneda global, es un campo de inversión con riesgos controlados para las multinacionales, lo que genera costosos e impactantes megaproyectos sobre el ambiente, para explorar y explotar yacimientos auríferos. Según la CEPAL, el 24% de las inversiones mundiales en exploración de metales en 2007 se concentraron en América Latina, aproximadamente unos 2.500 millones de dólares. Perú es el principal productor de oro en Latinoamérica y ocupa el quinto puesto en el ránking mundial, con 170 toneladas métricas en 2007, lo que supuso el 6,8% de la producción en el planeta.

Los conflictos entre las empresas mineras multinacionales, los obreros y las poblaciones donde se localizan los yacimientos, implican páginas ensangrentadas de la historia latinoamericana contemporánea. El impacto ambiental negativo de la actividad minera

³ Además de las instituciones ambientales de Naciones Unidas, ver las declaraciones recientes de la sociedad civil:

- La Declaración "Valley of 1000 Hills", elaborada en Kwa Zulu Natal, Sud Africa en marzo de 2002, por 40 participantes de la comunidad y de ONGs de África.

- El "Compromiso de Rio Branco", elaborado en Rio Branco, Brasil en mayo de 2002, por 100 participantes de la comunidad y de ONGs de todo el mundo.

- La "Second South-South Biopiracy Summit", desarrollada en Johannesburgo en agosto de 2002.

⁴ Consultado en: <http://www.preciooro.com/america-latina-se-proyecta-como-uno-de-los-principales-productores-de-oro.html>



acentúa la irracionalidad a la que somete el capitalismo; depredación ambiental y deterioro letal de la vida. Una vez más, la resistencia contra esa explotación irracional y por un modelo de desarrollo autosustentable proviene de pueblos y trabajadores afectados.

La matriz energética basada en el uso de combustibles orgánicos y fósiles (gasolina y diesel, entre otros), cambia aceleradamente; cada vez son más los países que optan por la energía eléctrica, con el propósito de reducir costos y contaminación ambiental. El litio es el material del cambio energético del siglo XXI. Actualmente, el país que produce la mayor cantidad de carbono de litio es Chile, cuyas reservas en Atacama llegan a 3.000 millones de toneladas métricas y son las segundas más grandes del planeta. El producto es utilizado para la fabricación de baterías de celulares y de vehículos, cámaras y computadores portátiles. El litio de Bolivia, representa 5.000 millones de toneladas métricas del metal, las mayores reservas mundiales.

Aunque Chile y Bolivia tienen enfoques divergentes en cuanto a la revalorización de los productos mineros, la existencia de estos recursos en Latinoamérica está poniendo a prueba la posible conciliación entre crecimiento económico, desarrollo sustentable y beneficio social de la actividad minera. Trátese del capitalismo moderado por la potencia pública o de un ensayo de país asumido como socialista del siglo XXI, las prácticas depredatorias crecientes aumentan riesgos ambientales e impactos negativos, sobre las poblaciones poseedoras de los nuevos recursos a explotar.

Persistente urbanización con planificación ausente

El predominio de la urbanización en Latinoamérica, refleja añejas oposiciones entre ciudad y campo. La muestra depredadora del capitalismo se muestra netamente en esa oposición. De la ciudad fordista propia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones a las metrópolis postfordistas, el proceso ha entrañado un grave deterioro ambiental que se vive de manera diferenciada socialmente. Nuestra región cuenta con 4 de las 25 ciudades más pobladas del planeta; Ciudad de México (3), Sao Paulo (7), Buenos Aires (17), Río de Janeiro (21), que son escenario de los más altos contrastes entre opulencia y miseria, lugares contaminados y emisores de contaminación en su amplio entorno. Metrópolis que son grandes demandantes y dilapidadoras de energía.



No obstante la agudización y concentración de esos problemas urbanos, Latinoamérica muestra la emergencia de actores sociales que resisten contra la depredación capitalista del tejido social y ambiental, como lo muestra Ávila García (2004) al dar cuenta de cómo los conflictos urbanos están asociados con el cambio en la relación entre Estado ambiente y sociedad de manera diferenciada, pues las nuevas tendencias de urbanización y los cambios en las políticas urbanas y ambientales, protagonizados por la privatización de servicios urbanos y nuevas regulaciones territoriales, acentúan la crisis del clientelismo político como método de control gubernamental. Además, el ascenso de los movimientos urbanos [y ambientalistas] inciden en los procesos de democratización, al incorporar demandas ciudadanas incluyentes desde la perspectiva del desarrollo autosustentable.

Calentamiento global.

Fidel Castro, atento a las manifestaciones depredadoras del capitalismo, señaló que si la reunión del G-20 en Londres (2 de abril, 2009) pretendía tomar medidas económicas supuestamente salvadoras, “el fantasma del cambio climático se apareció el mismo día en que se aprobaba el acuerdo final del G-20, como una tragedia más grave que la crisis económica.”

Para mostrar la gravedad ambiental cita un cable de la agencia AFP: “Alrededor del 80% del casquete glacial ártico podría desaparecer en una fecha tan próxima como el año 2040, en lugar de perdurar hasta el 2100 como se había estimado antes, de acuerdo a un nuevo estudio científico”.

“La superficie del Mar Ártico cubierta por el hielo al fin del verano podría no pasar en esa época de un millón de kilómetros cuadrados, contra 4,6 millones de km² hoy”. Esta información proviene de datos científicos provenientes de un estudio conjunto de la Universidad del Estado de Washington y la Administración norteamericana de la Atmósfera y los Océanos., quienes observaron que el casquete glacial en el Ártico, sufrió una reducción espectacular al final de los veranos de 2007 a 2008, cuando la superficie del hielo había alcanzado respectivamente 4,3 y 4,7 millones de km².

De acuerdo con las observaciones de Fidel Castro, los modelos aplicados permiten prever un Ártico prácticamente sin hielo dentro de 32 años. Según los científicos, los modelos anteriores preveían ese desenlace para el final del siglo XXI.



Para el sociólogo chileno Jorge Rojas, “El cambio climático surge como un fenómeno imposible de eludir y como el problema más complejo y difícil de superar de las sociedades modernas. Probablemente constituye el desafío más importante del siglo XXI, amenazando los avances de la civilización industrial y humana, la sustentabilidad de la vida y del planeta”. En sus investigaciones sobre este tema, Rojas comprueba que los efectos regionales del cambio climático se pueden medir y constata que este impacto depredador del ambiente hace surgir acciones colectivas que se oponen a tal degradación ambiental.

Panorama energético, crisis, riesgos y alternativas

La importancia geopolítica de las fuentes fósiles en la región: petróleo, gas y carbón, ha sido ampliamente estudiada y documentada. Venezuela disponía una de las mayores reservas de petróleo del mundo al alcanzar a finales de 2004 la cifra de 80.582 millones de barriles de crudo ligero, 3.441 millones más que al año anterior” de acuerdo con el Ministerio de Energía y Petróleo (MEP)⁵. En 2009, Las reservas certificadas de petróleo de la Faja del Orinoco alcanzaron 152 mil 561 millones de barriles y, una vez se terminen de certificar todas estas reservas, en el 2010 el Presidente Hugo Chávez calcula que serán de un total de 316 mil millones de barriles⁶ (en 2008, la mayor reserva mundial del crudo estaba en Arabia Saudita, con 256,000 MDBP).

Aún los países con reducida explotación petrolera están explorando el subsuelo de su territorio con la finalidad de descubrir yacimientos petrolíferos y de gas, pero en esta exploración destacan los países grandes; Brasil aumentó sus reservas certificadas a unos 25 mil millones de barriles, México cuenta con 14, 500 millones de barriles de petróleo y con 100,000 MDBP potenciales en Chicontepec, Veracruz.

En 2004 Centroamérica y Suramérica poseían el 8.9 % de las reservas mundiales del crudo y el 6 % del consumo, mientras que América del Norte tenía el 5.5 % de reservas mundiales, pero consumía el 30 % del oro negro, en Medio oriente, se tiene el 63.3 % de reservas y el 6% del consumo y Europa el 9.2 % de reservas, contra un consumo del 25.9 % del total de petróleo. Habría que hacer un nuevo mapa geopolítico del petróleo que diera cuenta de la nueva batalla por aumentar las reservas probadas del crudo, dada la

⁵ <http://www.7dias.us/news.php?nid=8185> (10-19-2005)

⁶ <http://www.psuv.org.ve/?q=node/2274> 14-01-2009



importancia mundial que tiene Venezuela y el rol de abastecedor de América Latina a los grandes consumidores de este energético.

John Saxe Fernández (2009), sitúa el carácter de reserva estratégica que juega América Latina para el abasto energético de Estados Unidos: “El Departamento de Energía, dice la versión no-clasificada del documento United States Command Strategy 2016, presentado por el Comando Sur del Pentágono, ‘tres naciones, Canadá, México y Venezuela, forman parte del grupo de los cuatro principales suministradores de energía a EEUU, los tres localizados dentro del hemisferio occidental. De acuerdo con la Coalition for Affordable and Reliable Energy, en las próximas dos décadas EEUU requerirá 31% más producción de petróleo y 62% más de gas natural, y América Latina se está transformando en un líder mundial energético con sus vastas reservas petroleras y de producción de gas y petróleo.’”

A estas consideraciones geoestratégicas del petróleo hay que añadir los conflictos internos suscitados por una industria altamente contaminante; las poblaciones afectadas por esa explotación han dado muestras de capacidad de movilización y resistencia, cuyas demandas no siempre pueden resolverse satisfactoriamente, ni en los países netamente capitalistas, ni en los que se precian de contar con gobiernos de izquierda⁷.

Respecto al gas, tenemos la versión oficial venezolana: “Fuentes especializadas indican que las reservas mundiales de gas natural se ubican en 5.500 billones de pies cúbicos, de los cuales el 96% está localizado fuera de Norteamérica. América Latina posee unos 259 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural, de las cuales 148 billones de pies cúbicos están en Venezuela, sin contar los 196 billones de pies cúbicos de expectativas en Gas que tiene este país.”⁸En 2007, se fundó la “OPEP del gas”, de la cual son integrantes activos Venezuela, que cuenta con el 2.3% de las reservas mundiales de gas y Bolivia que tiene el 0.4%. Una cantidad que no es despreciable para abastecer al mercado mundial, que está suscitando alianzas estratégicas con Rusia, que posee más del 24% de las reservas mundiales de gas.

⁷ El impacto ambiental de la industria petrolera es uno de los motores más importantes de la acción colectiva en Latinoamérica, ver el caso de: Articulación por un movimiento de afectados por la industria petrolera en países amazónicos (MAIPPA): <http://www.maippa.org/content/view/13253/72/>

⁸ Cfr. Aporrea.org Comunicación Popular para la Construcción del Socialismo del Siglo 21, <http://www.aporrea.org/actualidad/n18134.html>



El modelo energético latinoamericano está atravesado por conflictos geopolíticos internos y externos, pues igualmente la generación de electricidad, sea mediante plantas nucleares o de grandes presas Hidroeléctricas, genera impactos socioambientales de gran envergadura que detonan acciones colectivas para impedir la extensión de ese modelo.

López y Ochoa (s/f) analizan esos dilemas entre ambiente, crecimiento, desarrollo y acción colectiva en el tema de la construcción de presas: “Solo en el Cono Sur existen unas 1,000 presas y más del 60% de ellas se ubican en Brasil . El 25% de las presas de Suramérica son utilizadas para propósitos múltiples y el 26% para la generación de hidroenergía; el resto se divide entre control de inundaciones (17%), riego (15%), suministro de agua (13%) y otros usos individuales (4%) . En Latinoamérica, la construcción de presas ha generado diversos conflictos sociales relacionados con el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de biodiversidad, lo cual se ha traducido en un importante movimiento social de resistencia a su construcción. El Movimiento Mesoamericano contra las Represas considera que sólo en México y Centroamérica, hay más de 300 casos de pueblos afectados y ríos amenazados por la actividad de las presas. Otros países Latinoamericanos [donde hay] movimientos contra las presas son Colombia, Bolivia y Brasil.”

En general, la creación de infraestructura para la explotación de energéticos toma un carácter geoestratégico. En primer lugar, como ya se señaló, para el abastecimiento de la reserva estratégica estadounidense, la cual se sustenta en la dimensión militar que juegan el Comando Norte, las bases militares que aún ocupan territorios latinoamericanos, las implantaciones estratégicas de telecomunicaciones en zonas vinculadas con yacimientos de agua, energéticos y donde se abriga la biodiversidad de nuestra región. Recientemente, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, creada en 2005), ha previsto el modelo de seguridad energética requerido por Estados Unidos.

En segundo lugar, los procesos de integración desarrollados por los propios países latinoamericanos también tienen impactos socioambientales que no siempre son controlados por la población afectada por la construcción de la compleja infraestructura de comunicaciones y transportes, o de industrias explotadoras de distintas fuentes energéticas. Los proyectos asociados con el Plan Puebla Panamá, ahora extendido a Colombia, han generado acciones colectivas de resistencia frente a esos proyectos, que encabezan



movimientos sociales de alcance mesoamericano, al igual que la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), recientemente asumida por la UNASUR. Se trata en todos los casos, de planes geoestratégicos atravesados por el conflicto social y ambiental.

Biocombustibles: ¿alternativa energética o riesgo alimentario?

En la búsqueda de fuentes alternativas para la sustitución de energéticos de origen fósil, también destaca Latinoamérica, aunque no hay unanimidad respecto del papel que éstas alternativas, basadas en los biocombustibles, representan. Para Estados Unidos, el etanol y el biodiesel son parte de su estrategia de diversificación; Brasil⁹, que es el segundo productor mundial de esos energéticos es un aliado de la potencia del Norte. Venezuela, ha mostrado serias reservas sobre las implicaciones socioambientales derivadas de la producción de etanol: la sustitución de cultivos antes destinados a la alimentación humana, la concentración de la tierra aunada con el desmonte de bosques tropicales, el uso de organismos genéticamente modificados para elevar la producción, principalmente de caña de azúcar y maíz, principales proveedores de biodiesel.

La crisis alimentaria global atraviesa este debate sobre el etanol. Ávila García (2004) refuerza el problema que representa el cultivo de alimentos al añadir la demanda de agua: “Un elemento más que no se considera en las evaluaciones globales es la importación de alimentos que algunos países ricos adquieren de países pobres y que a través del ‘agua virtual’ ejercen una presión sobre los recursos hídricos. En este sentido, hay estimaciones gruesas que señalan que una dieta promedio de un estadounidense requiere de 5.4 metros cúbicos de agua al día, en contraste a la que requiere un habitante de un país pobre, cuya dieta de sobrevivencia requiere de 1 m³/día”. Si tenemos grandes recursos hídricos, un amplio potencial de recursos petroleros, de gas, de litio, de cobre y dado que nuestros pueblos siguen siendo golpeados por la crisis alimentaria, no parece conveniente la apuesta por el etanol y los biocombustibles como energías alternativas.

⁹ "Tenemos 80 millones de hectáreas en la Amazonia que van a transformarse en la Arabia Saudí del biodiesel", afirmó el ingeniero químico brasileño Expedito Parente al diario O Globo, nota resaltada por Raúl Zibechi, en "Estados Unidos y Brasil: La nueva alianza etanol", 6 de marzo de 2007, consultada en: WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales http://www.wrm.org.uy/temas/Biocombustibles/Alianza_Etanol.html



SEGUNDO EJE: NUEVOS ESCENARIOS PRODUCTIVOS

El C de W está cada vez más cuestionado¹⁰. En su propuesta original fracasó, pues no generó el crecimiento esperado en los países de la región. El quinquenio perdido (1997-2002) presentó indicadores aún más críticos que los de la década perdida, frente a la cual el Consenso se quiso erigir como alternativa. French-Davis (2000) señala “aunque la gran mayoría acepta los aciertos en el terreno de estabilidad macroeconómica y en el incremento de las exportaciones, hay un cuestionamiento cada vez más crítico en el crecimiento económico, el empleo y las condiciones sociales”

El modelo industrial orientado a la exportación que emerge en Latinoamérica desde mediados de los años 70 quizo ser impulsado en la década siguiente por las “políticas de ajuste estructural” y luego, ante su fracaso, mediante las 10 medidas propuestas en el C de W (Williamson, 1990). El decenio de los 90 vio crecer la aceptación de este decálogo por parte de la casi totalidad de gobiernos y elites nacionales, lo cual causó malestar por la triple limitación señalada antes; la región no creció, no generó empleo estable y suficiente y la pobreza creció en términos absolutos, aunque hubo algunos casos excepcionales en los que ésta disminuyó espectacularmente, pero en todos los países aumentó la polarización en la concentración del ingreso, es decir la desigualdad se incrementó.

Durante la última década del siglo XX, emergieron dos posiciones que plantean la continuación de las medidas propuestas en el llamado decálogo de Williamson: la de Joseph Stiglitz (1998), quien reconoce algunos aciertos pero propone cambios sensibles a la propuesta original y la del propio John Williamson, quien junto con la mayor parte de economistas que estuvieron presentes en la reunión fundadora del Consenso, en 1989, produce un documento (Kuczinski; Williamson, 2003) que reflexiona sobre las experiencias registradas en los países donde se siguieron los preceptos propuestos por el Consenso, diez años después. Su evaluación es positiva y concluye que las limitaciones encontradas en la aplicación del modelo se debieron a la tibieza con que se implantaron las medidas entrañadas en la versión original del Consenso. Aunque las propuestas ortodoxas

¹⁰ Esta parte del trabajo es una adaptación del capítulo de libro de próxima aparición: Preciado, Jaime y Martha Loza: “Eje Dilemático 1 El papel del Estado en la sociedad globalizada y la posición predominante respecto a la soberanía nacional”, en el libro **Dilemas entre democracia y desarrollo en América Latina**, coedición ALAS, Cátedra Alain Touraine, del ITESO



del libre comercio suponían un achicamiento del Estado y castrar sus capacidades reguladoras, el C deW se propone ciertas actividades reguladoras del Estado focalizadas en programas de combate a la pobreza y prioritariamente en la gestión de la privatización y la desregulación del mercado. Ello supuso que la llamada reforma del Estado orientara la potencia pública a sostener el andamiaje estatal en beneficio de los poderes fácticos.

Por su parte, el “Posconsenso de Washington” (Stiglitz, 1998, citado por Orlansky, 2005) “propuso una agenda institucionalista, regionalista, y la imposición de transparencia en el sector público. Así, durante los últimos años de los noventa los aportes analíticos y técnicos del Banco Mundial acentuaron crecientemente su consenso acerca de la necesidad para los países latinoamericanos de reformar las instituciones del Estado. Las expresiones ‘reformas de segunda generación’, ‘reformas del Estado’, y ‘reformas institucionales’ apuntan al principal objetivo de ‘mejorar las condiciones sociales y la competitividad manteniendo la estabilidad macroeconómica’ [...] El ‘Consenso post-Consenso de Washington’ (así expresado en el Forum Barcelona 2004) reconoce que existe un rol para el mercado. El tema -según Stiglitz- es hasta qué punto los neoliberales reconocen que existe un rol para el Estado, más allá del papel mínimo de hacer cumplir los contratos y los derechos de propiedad.”

Durante la primera década del siglo XXI se impulsaron modificaciones de las propuestas originales del C de W; además del posconsenso, hubo al menos tres matices que se fueron introduciendo en la reforma del decálogo de Williamson, desde perspectivas sociopolíticas diferenciadas:

1. Desde una perspectiva socialdemócrata, se obtuvieron conclusiones sobre las dificultades para extrapolar el C de W a otras latitudes, como los países del Este de Europa y los nacientes países creados al calor de la extinción de la Unión Soviética, lo que llevó a modificar sustancialmente la regulación estatal en la implantación del modelo industrial orientado a la exportación al mercado mundial (Held, 2006). En Latinoamérica destaca, en este sentido, el caso chileno y en menor medida el brasileño. Se reconoce al Estado como el garante de la estabilidad macroeconómica y el principal promotor del comercio mundial así como el responsable de una política social focalizada en compensaciones para los pobres.



2. En la medida que la apertura y liberalización indiscriminada de los países representó un abandono de la cooperación internacional para el desarrollo, que representa un ámbito de acción estatal destinado a modificar las desigualdades internacionales, el Consenso de Monterrey (2002) observó también algunas de las contradicciones surgidas a raíz de la adopción del C de W en los países en vías de desarrollo¹¹. Es notable que los acuerdos que propuso este Consenso, adoptaron un enfoque estadocéntrico, al subrayar el papel del gobierno y el sector público en la movilización de recursos financieros internos para el desarrollo; inversión extranjera directa y otras corrientes privadas; comercio internacional; aumento de la cooperación financiera internacional, mediante la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD); renegociación de la deuda externa (SELA, 2003). La solución de los problemas sistémicos que se propuso en Monterrey, no cuestionó abiertamente al C de W, pero introdujo elementos que reforzaron la regulación estatal, lo cual abrió a su vez nuevos espacios de negociación para el logro de la estabilidad macroeconómica por parte de los países latinoamericanos¹², pero manteniendo su atención sobre la agenda social.
3. Desde que el Banco Mundial elaboró el reporte sobre el Milagro de Asia del Este (World Bank, 1993), se empezaron a pensar alternativas frente al modelo imperante. Sus conclusiones reforzaron la idea de ir más allá del C de W, pues un grupo de países de esa región no siguió rígidamente esas recomendaciones y, sin embargo, alcanzaron los indicadores de desarrollo más altos de su historia. Stiglitz (1998) señala que esos países exitosos siguieron la línea del C de W en lo que hace al control de la inflación y a la

¹¹ Con el objetivo de revertir esta situación, Naciones Unidas organizó en marzo de 2002 en Monterrey (México), la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, en la que se buscó sobre todo conseguir compromisos cuantitativos de los grandes donantes. El resultado de la Conferencia fue una declaración institucional conocida como el "Consenso de Monterrey" en la que los participantes acuerdan: a) aumentar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), de manera que los países ricos dediquen el 0,7% de su PNB a la AOD; b) orientar la AOD a la consecución de los Objetivos Del Milenio (Naciones Unidas), y en consecuencia destinar más ayuda a los países más necesitados, desligando la ayuda de los intereses geopolíticos; c) impulsar partenariados con más participación por parte de los países receptores; y e) hacer del comercio internacional un instrumento de desarrollo, garantizando el acceso a los mercados de los países ricos de los productos de los países pobres.

¹² Colom (2008): "Desde finales de los 90 se observan notables cambios en la agenda del sistema internacional de cooperación para el desarrollo. Al cambio de estrategia del Banco Mundial desde 1995, hay que añadir el compromiso del sistema con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; un aumento más que notable de los recursos financieros puestos a disposición del sistema; y la transición hacia nuevas prácticas en la ejecución de los programas de ayuda. Todo ello está suponiendo la recuperación del papel del Estado como agente de desarrollo, y de prácticas como la planificación. Así, es pertinente cuestionarnos si al día de hoy el Consenso de Washington forma parte de la historia."



prudencia fiscal, pero actuaron en otra dirección al tomar otras estrategias, relacionadas con políticas igualitarias, o con una política industrial diseñada para acortar la brecha tecnológica con los países desarrollados. El milagro del Este Asiático fue propiciado entonces por el cumplimiento de un nuevo rol del Estado en el desarrollo económico. Al calor de esas diferencias, está prefigurándose una nueva referencia para el modelo de crecimiento y desarrollo, al cual se identifica como el Consenso de Beijing (Cooper Ramo, 2004), que es más una formulación inicial que un conjunto de recomendaciones emanadas desde las instituciones internacionales, pero lo relevante es que se propone un rol activo del Estado en la regulación con metas muy claras que refuerzan crecimiento y desarrollo¹³. Con la formación del Mercosur primero, y luego de UNASUR, constatamos que América Latina está entrando de lleno en este debate.

Con la reciente crisis global en la que se combina lo financiero, lo ecológico-alimentario y la crisis del modelo energético, se ha acentuado el regreso de los enfoques estadocéntricos para intervenir en la regulación de esta triple crisis. Marco Gandázequi (2009), constata en palabras de Stephen King, jefe del equipo de economistas del Banco HSBC, tres problemas que enfrenta actualmente el capitalismo global como sistema. “El primer problema se refiere a la incapacidad del mercado para determinar cómo y cuándo distribuir el capital. Según King, los gestores políticos están convencidos que si no se regula el mercado todo el sistema colapsará.” Un segundo problema se refiere a: “las tendencias contrarias a la ideología del libre comercio que aparecen en todos los países desarrollados”, lo que hace renunciar aún a los países centrales al núcleo duro del libre mercado, al aceptar prácticas neo-proteccionistas como naturales o al apegarse a la gestión estatal como seguro contra la crisis. El tercer problema consiste en que “no se podrá seguir promoviendo la creencia que el capitalismo es un sistema basado en la competencia y en la toma de ‘riesgos’. Los gobiernos tendrán que ‘asegurar’ las pensiones y los préstamos a todos los niveles.”

En Latinoamérica hay tendencias encontradas sobre la coexistencia de las diferentes versiones de los Consensos, en el marco de la crisis neoliberal. El Consenso post-

¹³ “La idea base del Beijing Consensus parte del descreimiento en cuanto a los beneficios de privatizaciones totales y de libre comercio. Los países pueden insertarse dentro del sistema económico global en una forma que les permita ser verdaderamente independientes, protegiendo un estilo de vida buscando soluciones propias y creciendo pero con el interés nacional resguardado. La meta es simplemente crecer, pero preservando la independencia e identidad en el estilo de vida.” (Giuffrè, 2004)



Washington, en su vertiente más ortodoxa, al estilo Williamson, se trata de seguir principalmente en el caso mexicano, colombiano y peruano, así como en varios países caribeños, El Salvador y en Honduras, pero sus límites están a la vista si se hacen notar los impactos negativos de la crisis actual sobre los pilares que sustentan ese modelo: la apertura-liberalización-privatización, no pudo “blindar” a sus economías ante la crisis; tampoco el fortalecimiento del Estado, como gestor de la crisis, pues los costosos rescates bancarios y del sistema financiero basado en la especulación, más que regular las contradicciones del modelo neoliberal las están acentuando.

En el caso argentino, donde predominaron las medidas inspiradas en el Post Consenso de Washington, se mostró que con un manejo flexible de los aciertos de esa propuesta de política económica, el Estado puede regular con mejores instrumentos los conflictos socioeconómicos derivados de la naturaleza misma del modelo neoliberal, pero igualmente la crisis hace estragos en las salidas de mediano y largo plazo. Mientras que en Brasil, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Guatemala, se ensayan combinaciones entre las medidas sugeridas en el Post Consenso de Washington por Stiglitz y una “alternativa” socialdemócrata¹⁴ que abre espacios a la regulación estatal de la crisis, particularmente de la agenda social. Sin embargo, las variables siguen pesando principalmente del lado de la estabilidad macroeconómica y de la hegemonía del modelo industrial orientado a la exportación.

Finalmente, hay un grupo de países caracterizados por tener gobiernos de izquierda, con base en movimientos sociales: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, que impulsan nuevos modelos de gestión estatal de las políticas públicas, que se acerca más a lo que se denomina el Consenso de Beijing. En esos casos, encontramos una inserción al mercado mundial que está mediada por negociaciones que implican definir la gradualidad y los términos de reciprocidad de los intercambios comerciales, anteponiendo los intereses nacionales. En la mayoría de estos países encontramos que hay procesos políticos que

¹⁴ En la entrevista que hacen Pleyers Geoffrey y Alan Johnson (2008) a David Held, se dice que “en sentido crítico, no podemos declarar como éxitos del Consenso de Washington a las economías en desarrollo más sobresalientes. En las naciones donde el Consenso ha penetrado de manera más eficiente, ha debilitado sus economías en la competencia internacional. Se ha prosperado en los países que fueron capaces de diseñar sus propias políticas de compromiso secuenciado con la economía global –y no sólo en la India y China, sino también en Vietnam y Uganda. Sin embargo, nada de esto fue previsto por las doctrinas económicas liberales



desembocaron en la discusión y aprobación de nuevas Constituciones que plantean nuevos derechos sociales de ciudadanía y un fortalecimiento del Estado social nacional. Lo cual implica, a su vez, acrecentar y enriquecer el debate sobre el “Socialismo del siglo XXI”.

TERCER EJE: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y CIUDADANÍA¹⁵

Luego de una década perdida y de reformas estructurales, la región latinoamericana vivió en los años noventa una década caracterizada por su optimismo democrático. Aquel contraste observado por Alain Touraine (1989), en el que a pesar de la crisis económica se había logrado una democratización de la mayoría de los países latinoamericanos en los ochenta, se amplificó en la década siguiente. De acuerdo con una visión extremadamente optimista, la democracia formal era impulsada a lo largo y ancho del subcontinente y los sistemas multipartidarios parecían fortalecerse frente al autoritarismo presidencial. El mismo discurso neoliberal que enaltecía las ventajas del libre mercado, la desregulación, las privatizaciones y el Estado mínimo, asociaba el crecimiento económico necesario para el desarrollo de la región, con el avance de la democracia liberal.

Sin embargo, la fallida conciliación entre el conflictivo triángulo Estado– Sociedad– Mercado, que presuponía dicha “consolidación” de la democracia liberal-procedimental en la región, fue el primer gran indicio de que la imposición de un modelo de organización política y un sistema de valores homogéneo promovido como democracia liberal, representaba fundamentalmente, un discurso dominante y una hegemonía socio-cultural de occidente sobre las prácticas políticas de los actores latinoamericanos.

Por su parte, los saldos económicos y sociales reflejados en una creciente concentración asimétrica del ingreso; la flexibilización laboral, que incrementó la precariedad del trabajo y aumentó la desprotección del asalariado; el desmantelamiento de las políticas sociales heredadas del Estado de bienestar; así como la desregulación financiera que aumentó la vulnerabilidad externa de los Estados llevando al estallido de crisis especulativas en cadena, comprobaron que las amenazas a la democracia no podían ser reducidas al plano económico del discurso neoliberal dominante.

¹⁵ Esta parte del trabajo es una adaptación del capítulo de libro de próxima aparición: Preciado, Jaime y Pablo Uc: “Actores de la nueva gramática democrática en América Latina. Escenarios de riesgo”, en el libro **Democracia, políticas públicas y desarrollo en América Latina**, en la editorial de la Universidad de Guadalajara, México.



El fin del siglo XX y el inicio del actual centenario, han comprobado que otros actores del sistema internacional, tales como las instituciones internacionales de “cooperación” (la USAID o el NED) han funcionado como importantes instrumentos de intervención extranjera, principalmente estadounidense, en la región. Mientras que bajo su influencia político-ideológica, surgen nuevas coaliciones formadas por grupos cívico-políticos de la derecha opositora, derrotada electoralmente por la izquierda política en más de las dos terceras de los países latinoamericanos.

Paralelamente, elites económico-empresariales desfavorecidas por las reformas en marcha, en varios casos de índole constitucional, y el soporte político que reciben los proyectos políticos de la izquierda electoral tanto por los movimientos sociales como por las instituciones regionales de integración, han impulsado novedosas estrategias de desestabilización y una particular vinculación entre los grupos de oposición, que se valen de su gran poder económico y mediático. Estas coaliciones políticas se han convertido en nuevos catalizadores de inestabilidad intra-nacional y regional, así como en factores de riesgo para la democracia latinoamericana en los últimos años.

Una herramienta utilizada actualmente para la consolidación democrática de las izquierdas en la región, lo representa la implementación de instrumentos políticos legales tradicionalmente en desuso en América Latina. Tales como el referéndum o el plebiscito, implementados para consolidar la legitimidad de sus proyectos políticos y conducir la gestión y manejo de las amenazas y riesgos que enfrentan sus regímenes democráticos. Los resultados de estos procedimientos democráticos, han sido permanentemente desacreditados por la derecha en Latinoamérica, mediante intensivas campañas mediáticas de desprestigio sobre su legitimidad, llegando incluso a convertirse en una plataforma de diversas conspiraciones y prácticas antidemocráticas.

Un preámbulo del debate teórico sobre la democracia

Las consideraciones teóricas en torno a la democracia constituyen un inagotable espectro de discusión en las ciencias sociales. Sus autores y las fuentes referenciales clásicas y contemporáneas no se limitan a la divergencia, sino que llegan incluso a ser totalmente opuestas al momento de (re)definir la democracia, así como los conceptos, prácticas y valores que involucra el ejercicio de lo ‘democrático’.



De acuerdo a las consideraciones de Sousa Santos y Avritzer (2004) es posible identificar una concepción hegemónica y otra no hegemónica de la democracia en la segunda mitad del siglo XX, lo que amplió los horizontes del debate de la primera mitad del siglo, concentrado en la discusión entre democracia liberal y el proyecto marxista de democracia. Es posible considerar que la mencionada concepción hegemónica intentó dar respuesta a tres grandes cuestiones: la relación entre procedimiento y forma; la del papel de la burocracia en la vida democrática, y la inevitable necesidad de la representación en las democracias a gran escala (Dahl, 1998), pero omitiendo que la representación abarca por lo menos tres dimensiones: autorización, identidad y rendición de cuentas.

El desenvolvimiento histórico de las democracias occidentales, llevó a confirmar que la “representación” vía sistemas electorales, no garantiza que las entidades minoritarias tengan eco en las instancias de gobierno (García Linera, 2005), mientras que la rendición de cuentas es amordazada por la consideración de la democracia como un producto de índole fundamentalmente política, en el que el electorado es una masa conducida por una elite política con capacidad racional de organización y liderazgo (Pareto, 1987).

De tal forma, la concepción hegemónica de la democracia enfrentó una incapacidad para dar reconocimiento a diversos actores y necesidades inherentes a los sistemas sociales vigentes, en el marco de valores diferenciados, tanto los tradicionalmente presumidos como occidentales: justicia, libertad o igualdad, como los omitidos en los espacios postcoloniales: diversidad cultural, plurinacionalidad, organización comunitaria, etc.

En lo que respecta a la concepción no hegemónica de la democracia, si bien no rompió con el ‘procedimentalismo kelseniano’, enfatizó su papel como fórmula de conciliación o discordia en la relación estado - sociedad (Sousa Santos y Avritzer, 2004: 45-46), destacando la necesidad de que fuera planteada como una gramática de organización social, con especificidades históricas, geográficas y culturales.

Desde esta perspectiva, los actores sociales serían capaces de redefinir a la democracia mediante nuevas prácticas políticas. En este tenor los trabajos de Habermas (1984) replantearon la discusión sobre el procedimentalismo, sugiriendo su análisis como práctica social y no como un simple método de constitución de gobiernos, tradicionalmente enclaustrado en la revisión de sistemas electorales y garantías de acceso al voto.



En las décadas de 1980 y 1990 los movimientos sociales emergentes en América Latina y otros contextos del tercer mundo y del posteriormente denominado ‘sur global’, como la India o Sudáfrica, exigieron la ampliación de lo público; la transformación de las prácticas dominantes; el aumento de la ciudadanía y la inserción en la política de actores sociales excluidos, a fin de institucionalizar la diversidad cultural como derecho legal y político. Es por ello, que en la fórmula de la democracia representativa se abrió un impostergable margen a distintos valores que van más allá de la mera ‘autorización’ de gobernantes para ejercer el poder mediante la administración pública, y exigen así nuevos métodos para la rendición de cuentas, la incorporación de la diversidad identitaria y una participación permanente de los ciudadanos.

El carácter genuino de la ‘gramática democrática’¹⁶, es su particular indeterminación, ya que siempre puede implicar una ruptura con las tradiciones establecidas y, por lo tanto, la tentativa implantación de nuevas determinaciones, normas y leyes. Esto es lo que la diferencia de una democracia meramente representativa, limitada a los procesos electorales de confirmación y autorización de candidatos previamente elegidos, en la que la indeterminación se reduce “a no saber quién ocupará una posición de poder” (Sousa Santos y Avritzer, 2004: 46). La construcción de esta ‘gramática democrática’ ha sido diferenciada en tiempos y espacios, logrando una importante reinención de la democracia participativa en recientes coyunturas políticas atravesadas en el sur global, por lo cual es importante identificar con más detalle los paulatinos cambios conceptuales y prácticos que se han suscitado en la primera década del siglo XXI en América Latina, frente a las estructuras dominantes que persisten y se reformulan.

La última década de estructuración política en América Latina, se compone de un conjunto de transformaciones en el ámbito de procedimientos y formas en el ejercicio democrático (gramática de la democracia), en la tendencia ideológica general de los grupos en el poder del Estado, en la presencia de bastiones políticos diferenciados a distintas escalas al interior de los Estados Nacionales, así como en el papel determinante de los movimientos sociales (Zibechi, 2006).

¹⁶ Es un término utilizado por B. de Sousa Santos (2005), para deconstruir conceptualmente el razonamiento teórico sobre la democracia, propio de la reflexión crítica de los estudios postcoloniales.



Si se toma en cuenta la emergencia de estas diferenciadas manifestaciones y su consolidación bajo sistemas de legitimación que, haciendo uso tanto de prácticas y mecanismos occidentales dominantes como de manifestaciones más apegadas a los usos y costumbres de minorías sociológicas o estructuralmente excluidas en los Estados latinoamericanos (como ocurre en Bolivia, por ejemplo), es posible considerar que se ha creado un esquema propicio para reinterpretar la gramática de la democracia en la región. Además se ha ido forjando un esquema de redes sociales e institucionales de carácter internacional y supranacional, capaz de generar sólidos cuestionamientos sobre el tipo de democracia que debiera regir a los sistemas de organización política, desde la perspectiva dominante, en sintonía con la construcción de una auténtica autonomía en la región.

Es posible señalar en los siguientes ejes y sub-ejes, las manifestaciones en las que se ha centrado la reinterpretación de la democracia y lo democrático en la región en la última década:

a. Cambios en las tendencias políticas del mapa electoral latinoamericano

- “El locus del ‘centro’ se ha movido considerablemente a la izquierda de donde estaba hace diez años” (Wallerstein, 2007)¹⁷. De 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela al frente del Movimiento V República, hasta 2008 con el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay resultante de una coalición ‘Alianza Patriótica para el Cambio’, se inició una tendencia de triunfos electorales de partidos progresistas y de variadas orientaciones de izquierda, en su mayoría resultantes de coaliciones políticas. En Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (2003, reelecto en 2007), en Uruguay Tabaré Vazquez (2004), en Argentina Néstor y Cristina (Fdez.) Kirchner (2003 y 2007 respectivamente), en Chile Michelle Bachelet (2006), en Ecuador Rafael Correa (2007), en Nicaragua Daniel Ortega (2007), en Guatemala Álvaro Colom (2007), en Paraguay Fernando Lugo (2008), en El Salvador Mauricio Funes (2009).
- La instalación de la izquierda política en la región ha sido progresiva y diversificada tanto en sus discursos y prácticas, como en la naturaleza de las bases en las que se apoyan, que van desde coaliciones políticas tradicionales, hasta bases partidarias

¹⁷ La Jornada (19 de mayo de 2007) Consultado en <http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=opinion&article=032a1mun>



instaladas sobre movimientos sociales, con los cuales suelen mantener una tensa relación, llegando en muchos casos a la ruptura. Este fue el caso de ‘Vía Campesina’ con el gobierno de Lula, o el de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) con el gobierno de Correa.

b. *La presencia de corrientes políticas diferenciadas al interior de los Estados nacionales*

- Bastiones de oposición política en las esferas parlamentarias y los gobiernos locales. Se ha convertido en una constante el triunfo de partidos políticos de izquierda en esferas locales estratégicas y la obtención de la mayoría parlamentaria dentro de países gobernados por la derecha a nivel federal. Este es el caso de México después de las elecciones de 2006. De forma inversa, la derecha política y económica se ha repositionado en las esferas locales, creando incluso nuevas formas de organización civil que responden a la defensa de intereses históricos que se han visto amenazados por las reformas constitucionales, leyes de distribución, o proyectos políticos de la izquierda en el poder.

c. *Consolidación de una izquierda social desde los movimientos sociales*

- El papel de los movimientos sociales, recientemente denominados como “sociedades en movimiento” por Zibechi (2007), han afianzado su papel en la organización social y su influencia en el diseño de la agenda política gubernamental. Se han convertido en organizaciones bien articuladas al interior de sus países y afuera, con capacidad no sólo para deponer a los gobernantes y paralizar el funcionamiento de los sistemas políticos, sino también para instalar a sus líderes en la estructura de poder del Estado.,
- Bajo un particular contexto de apoyo-tensiones con la izquierda política instalada en el poder, lo que ha desafiado la construcción de la gobernabilidad democrática en donde se han polarizado las tensiones entre la izquierda social y la izquierda gubernamental (donde destaca el caso de Brasil).

d. *Nuevos procedimientos y herramientas democráticas*

- Reutilización o implementación de mecanismos políticos en desuso que aparecen como figuras legítimas respaldadas por aparatos y estructuras legales. Este es el caso de la



implementación del ‘referéndum’ y el ‘plebiscito’ en las prácticas políticas de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que no sólo han logrado hacer de las urnas un acto procedimental en las elecciones, sino también una auténtica arma de legitimación política para los gobernantes frente a la oposición política endógena y exógena y sus campañas de desprestigio y desestabilización. Así como también para legitimar una serie de actos que van desde los proyectos de grandes obras públicas hasta los de transformación más estructural, tales como reformas e incluso la creación de nuevas constituciones . Estos instrumentos no han sido tomados exclusivamente por la izquierda política, ya que recientemente grupos de derecha (inicialmente reacios a aceptar la validez de su implementación) como los de la Media Luna Ampliada en Bolivia, se han valido de estos para impulsar proyectos de autonomía regional.

- Renovaciones constitucionales. En la última década, se ha iniciado un importante proceso de reformas, instalación de asambleas constituyentes y aprobaciones de Constituciones nacionales, algunos casos desde una perspectiva más ortodoxa en que la clase política decide “desde arriba” el diseño de la misma para ser entonces votada popularmente, y en otros involucrando incluso a los movimientos sociales en la elaboración de su diseño. Lo que destaca sin embargo, es que tanto las nuevas constituciones de Venezuela (2000), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), como los líderes que las han impulsado detentan un amplio respaldo popular legitimado por la figura del referéndum.
- La consolidación de métodos participativos como políticas de Estado. Resalta que destacadas iniciativas principalmente en la esfera local, como el ‘presupuesto participativo’ (implementado por ejemplo en San Salvador de Bahía y Porto Alegre, Brasil), foros de atención y participación ciudadana hayan pasado de ser políticas de partido, a ser políticas de Estado, con perdurabilidad más allá de los cambios que se dan en los procesos electorales.

Los ejes expuestos, y muy brevemente desarrollados, constituyen algunos de los principales elementos de la gramática democrática contemporánea en América Latina.



CUARTO EJE: CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO SOCIAL LATINOAMERICANO

El pensamiento social latinoamericano se enfrenta al desafío de responder al mismo tiempo a su especificidad y mejores tradiciones, tanto como a su inserción en los debates universales de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Herederas de propuestas disciplinarias originales, como la teoría de la dependencia o del pensamiento socioeconómico de la CEPAL, las ciencias sociales latinoamericanas toman distancia de enfoques marcadamente anglo-euro-céntricos, para avanzar en una línea crítica del pensamiento y de las prácticas neocolonialistas.

En este proceso, el pensamiento social latinoamericano está logrando recuperar su originalidad y vigor, gracias a un rico diálogo Sur-Sur que, sin embargo, no pierde de vista el carácter global de sus reflexiones y de sus referentes universales. El camino no podía ser otro que la crítica de la razón instrumental de la modernidad y actualmente del nihilismo posmoderno, aunque comparta con éste último la búsqueda profunda de otras causalidades de la razón e incluso de la no razón (lo que se expresa en la revalorización del sujeto, su temporalidad no lineal, sus intersubjetividades y diversidades identitarias y culturales).

Así, las condicionantes y potencialidades sociales impuestas por el progreso, concepto camuflado en el desarrollo, y las aspiraciones por alcanzarlo, sitúan el tema del cambio social y de la utopía en un plano paradójicamente complementario. Si la modernidad occidental subordinó la revolución técnico-científica, sus saberes, a los imperativos de la utopía capitalista, la crisis actual de ese paradigma repercute en la búsqueda de las causalidades -de la racionalidad- del cambio social y de los roles a seguir del conocimiento técnico-científico en la utopía alternativa que sustituya a la nunca alcanzada utopía capitalista.

Edgar Morin(2000)¹⁸, plantea un triple desafío para la construcción del pensamiento complejo requerido en este cambio de época para la humanidad: 1) el desafío epistemológico entrañado en un pensamiento transdisciplinario que no se reduce al ámbito de las ciencias sociales, sino que pone en diálogo a toda la ciencia y las humanidades, para

¹⁸ A este autor le preocupa que “Entre el pensamiento científico, que separa los conocimientos y no reflexiona sobre el destino humano, y el pensamiento humanista, el cual ignora las aportaciones de las ciencias susceptibles de nutrir nuevos interrogantes sobre el mundo y la vida, el divorcio es total. Y peligroso.”



preguntarse sobre el sentido de futuro; 2) el desafío socio-antropológico, que representa la construcción social del conocimiento, en donde el trabajo intelectual no es una obra exclusivamente individual, sino el resultado de comunidades del saber orientadas por una política pública de ciencia y tecnología; 3) el desafío ético-cívico, que consiste en una visión amplia de utilidad y pertinencia del conocimiento, respecto del propio devenir teórico de la ciencia y del conocimiento aplicado, de manera que la relación entre intelectuales y usuarios (gobierno, instituciones públicas, privadas, organismos sociales), crea ciudadanía.

Estos desafíos han sido asumidos por el pensamiento latinoamericano en una triple dirección: 1) en la revalorización de la filosofía de la praxis, que se propone una visión abarcadora, que parte de la reflexión crítica de y desde las prácticas sociales, donde se produce sentido: la teoría del desarrollo y cambio social, así como los paradigmas y referencias universales: la autosustentabilidad, como relación sociedad-naturaleza historizada, o la (re)creación de derechos económicos, políticos y culturales; 2) en la dirección de la teoría de la acción social colectiva, que está centrada en el actor, en su multi-dimensionalidad espacial-temporal-existencial (intersubjetiva) lo cual ha implicado un diálogo entre saberes más allá de ciencia-tecnología-humanidades, al incluir saberes populares y de pueblos originarios y 3) en la dirección de la construcción de alternativas, que permite pasar -en un ir y venir- del pensamiento a la acción (auto-reflexividad) en diversas intervenciones sociales razonadas, deliberadas.

El ámbito desde donde se procesa el pensamiento, está mediado por un contexto de instituciones educativas productoras de campos del conocimiento, que están sustentadas en comunidades epistemológicas con un alto grado de heterogeneidad; ámbito que también está mediado por la cultura en su más amplia acepción. Las instituciones académicas encargadas de crear y preservar los saberes mediante la docencia, la investigación, la difusión-extensión del saber de manera integrada son las universidades, aunque también hay instituciones especializadas en alguno de estos campos. Tomada como región, Latinoamérica presenta un campo privilegiado para la sociología y las ciencias sociales por su vigorosa actividad intelectual, como lo muestran instituciones como FLACSO, CLACSO o la propia Asociación Latinoamericana de Sociología, que busca fortalecerse como un movimiento intelectual del pensamiento social crítico.



Sin embargo, la convocatoria al XXVII Congreso de ALAS (2009) señala: “Muchas instituciones académicas se encuentran hoy en crisis y en apariencia lo social que las habita, sus actores y protagonistas, no se encuentran suficientemente comprometidos a comprender los dilemas de la producción de conocimiento que le conciernen y que como sabemos no existen sino ligados a los procesos sociales que lo circundan.” Esta crisis termina por incrementar “la concentración, privatización y unidireccionalidad del desarrollo científico-tecnológico.”

Por ello, el XXVII Congreso de ALAS constata y propone que “los procesos de construcción de conocimiento requieren del encuentro discursivo de la diversidad cultural, del intelecto singular y colectivo, y de nuevas formas éticas en las que el otro ‘como objeto-dato’ pueda operar por sí, con autonomía, como sujeto de derecho frente al conocimiento que se le impone. Las luchas tecnológicas constituyen sólo una parte de las luchas por la apropiación de lógicas alternativas que pueden resultar hoy acordes con los movimientos sociales de resistencia a los patrones de acumulación científico-tecnológicos. Quizás no resulte posible sino pensar en la disposición de los instrumentos de conocimiento tradicionales que ya se disponen, pero se atisba por fin a descubrir por medio de una ‘epistemología ya de segundo orden’ el colectivo productor y ese movimiento intelectual que genere una escena de Latinoamérica interrogada.”

El desafío mayor para el pensamiento crítico es la construcción de alternativas frente a la crisis del neoliberalismo y consecuentemente frente a la crisis del capitalismo. El gran debate que tenemos ya en marcha, se refiere a los alcances e implicaciones teóricas y sociológicas del llamado Socialismo del Siglo XXI. Desde el pensamiento latinoamericano, desde las discusiones generadas a partir de la acción colectiva de resistencia antineoliberal y desde la construcción de alternativas, tenemos un amplio campo de reflexión. Así como la actividad académica se viene refrescando, paradójicamente, frente a la crisis, las instituciones de educación superior, centros e institutos de investigación tienen el triple desafío del pensamiento complejo, crítico y alternativo.

La realización y búsqueda de alternativas en Latinoamérica se va robusteciendo:

- El proceso de integración autónomo que representa la UNASUR y sus vertientes comercial en MERCOSUR y financiera en el Banco del Sur.



- La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), originada en el gobierno de Hugo Chávez, es también propicia para el logro de la autonomía social y política latinoamericana, a través de los proyectos que apuntalan un modelo energético alternativo, con PETROAMÉRICA, PETROSUR, PETROANDINA y PETROCARIBE; o que apuntalan el proyecto de integración cultural que presenta TELESUR; o que propicia, junto con los gobiernos de Bolivia, Cuba y Ecuador, una integración más horizontal y solidaria, a través de los Tratados de Comercio entre los Pueblos.
- Aumentan también los espacios de convergencia político-diplomática en la región, en la medida que se fortalece el Grupo de Río, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el mismo Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y diversas instancias de coordinación que son encabezadas por Jefes de Estado latinoamericanos, para redefinir las relaciones internacionales de América Latina.
- Y, la mayor fortaleza de nuestra región, que representa el movimiento social en complejas redes de redes, como el Foro Social Mundial, en el que Latinoamérica tiene un rol protagónico, las coordinadoras de pueblos, etnias, luchas por la equidad entre géneros, diversos movimientos de resistencia antineoliberal y procesos desde abajo para la construcción de alternativas.

Tenemos ante nosotros un campo fértil para el pensamiento social crítico. Tenemos con ese nosotros amplio, enriquecido con los actores sociales, la oportunidad de interrogar si América Latina va en la dirección del Socialismo del Siglo XXI y la obligación ética de preguntarnos sobre el rol a desempeñar por académicos/as dispuestos a jugar un papel crítico desde el poder intelectual compartido.



Bibliografía

Alba, Felipe (2007) “Geopolítica del agua en México: La oposición entre la hidropolítica y el conflicto sociopolítico. Los nuevos rostros de las ‘luchas’ sociales”, **INTERAÇÕES. Revista Internacional de Desenvolvimento Local**. V. 8, N. 1, p. 95-112, Marzo.

Ávila García, Patricia (2004) **Cambio global y recursos hídricos en México: hidropolítica y conflictos contemporáneos por el agua**, Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas, Instituto Nacional de Ecología, México.

Colom Jaén, Artur (2008) “La nueva agenda del sistema de cooperación: ¿el fin del Consenso de Washington?” *Revista de Economía Mundial* 18, 79-92, Universitat Autònoma de Barcelona. Cooper Ramo, Joshua (2004) **The Beijing Consensus**, The Foreign Policy Centre, The Mezzanine, Elizabeth House, London.

Dahl, Robert (1997) *La poliarquía: Participación y oposición*, Madrid: Tecnos.

Ffrench-Davis, R. (2000) **Reforming the reforms in Latin America**. New York, St. Martin Press. De Sousa Santos, Boaventura (2005) “El Estado como novísimo movimiento social”, En: *Reinventar la democracia. Reinventar el estado*. Acceso al texto completo: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sousa/Reinventar%20la%20Democracia.pdf>

García Linera, Álvaro (2005) *Autonomías indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales*, ILDIS: La Paz.

Gandásegui, Marco A. hijo (2009) “La mano visible del gobierno al rescate” Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), **América Latina en Movimiento**, 2009-03-12, consultado en: <http://alainet.org/active/29389>

Giuffré, Mercedes (2004) “El Consenso de Beijing versus el Consenso de Washington”, **Primeras Jornadas de Estudios Orientales**, Transoxiana, Journal Libre de Estudios Orientales, 20 y 21 de Diciembre, Escuela de Estudios Orientales, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Habermas, Jürgen (1984) *Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos*, México: Cátedra.



Held, David (2006) *Un pacto global. La alternativa socialdemócrata al consenso de Washington*, Taurus, Madrid.

Kuczynski, Pedro-Pablo y John Williamson (2003): **After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America**, Institute of International Economics, Washington.

López Ramírez, Alexander (2008) **Conflictos socioambientales en América Latina: hidropolítica de los cursos de agua internacionales**, Instituto de Estudios Latinoamericanos de Austria, Viena 14 de Abril.

López Ramírez, Mario y Heliodoro Ochoa García (s/f) Conflictos sociales por el agua en América Latina: el caso de Juanacatlán y El Salto en Jalisco, México, en Preciado Coronado, Jaime (coord..) **Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña (2006-2007)**, en proceso de edición.

Morin, Edgar (2000) **La mente bien ordenada (Repensar la forma; reformar el pensamiento)**, col. Los tres mundos, Barcelona, Seix-Barral.

Orlansky, Dora. (2005) "El concepto de desarrollo y las reformas estatales: visiones de los noventa." **Documentos. Aportes Administración Pública Gestión Estatal**, ene./dic., no.6, p.41-61.

Pareto, Wilfredo (1987) *Escritos sociológicos*, España: Alianza Editorial.

Pleyers, Geoffrey y Alan Johnson (2008) "Entrevistas con David Held, Globalización, democracia y mercados: una alternativa socialdemócrata" **Sociológica, Universidad Autónoma Metropolitana**, unidad Azcapotzalco, año 23, número 66, pp. 187-224, enero-abril.

Sistema Económico Latinoamericano, SELA (2003): **Consenso de Monterrey. Prioridades y perspectivas de América Latina y el Caribe**, SP/RR-ALC-PCANCSS-MRE/Di N° 2, Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria para la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, Caracas , Venezuela ,16 - 17 de Junio, consultado en:

http://www.sela.org/public_html/AA2K3/ESP/docs/Coop/sur.sur/Di2.htm



Saxe-Fernández, John (2009) “América Latina: ¿Reserva estratégica de Estados Unidos?” en **OSAL** (Buenos Aires: CLACSO) Año X, N° 25, abril.

Sousa Santos, Boaventura (coord.) (2004) *Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa*, México: FCE.

Stiglitz, Joseph (1998) **More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus**, The 1998 WIDER Annual Lecture (Helsinki, Finlandia) Enero 7.

Touraine, Alain (1989) **América Latina: Política y sociedad**, Madrid: Espasa Calpe.

Williamson J. (1990) **Latin American Adjustment. How much has happened?** Washington: Institute for International Economics.

World Bank(1993) **The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy**, New York: Oxford University Press (Preparado por John Page, Nancy Birdsall, Ed Campos, W. Max Corden, Chang-Shik Kim, Howard Pack, Richard Sabot, Joseph Stiglitz, y Marilou Uy).

Zibechi, Raúl (2006) **Dispersar el poder**, México: La casa del mago/Cuadernos de resistencia.